**"COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA DE LOS ACTOS
DEL GOBIERNO EN RELACIÓN A LA SITUACIÓN DE
INSEGURIDAD QUE SE VIVE EN LA REGIÓN DE LA
ARAUCANÍA"**

363ª LEGISLATURA

**Acta de la sesión 24ª, especial, celebrada en miércoles 17 de agosto de
2016**

SUMARIO.

Inicio de la discusión y votación de las Conclusiones y Propuestas que se incluirán en el Informe respectivo.

Se abre la sesión a las 09:00 horas.

ASISTENCIA

Preside accidentalmente el diputado señor Ignacio Urrutia.

Asisten las diputadas señoras Claudia Nogueira y Clemira Pacheco, y los diputados señores Bernardo Berger, Fuad Chahin, Gustavo Hasbún, Fernando Meza, Jorge Rathgeb, Joaquín Tuma y Mario Venegas.

Actúa como Secretario el abogado señor Sergio Malagamba Stiglich y como abogado ayudante el señor Mauricio Vicencio Bustamante.

CUENTA

Reemplazo del diputado Germán Becker por el señor Bernardo Berger.

ACUERDOS

1.- Votar por separado cada uno de los puntos de las Conclusiones y Propuestas.

2.- Remitir copia del Informe que evacue la Comisión a la Contraloría General de la República.

3.- Celebrar una sesión especial el día de hoy, de 18:00 a 20:00 horas, a objeto de continuar con la discusión y votación de las Conclusiones y Propuestas.

ORDEN DEL DÍA

Inicio de la discusión y votación de las Conclusiones y Propuestas que se incluirán en el Informe respectivo.

I. Análisis de la situación de seguridad pública y de participación de los organismos gubernamentales.

Los niveles de violencia verificados en los últimos años en la Región de La Araucanía resultan inéditos y dejan en evidencia la incapacidad estatal de proveer seguridad a la población en algunos sectores rurales. Lo anterior, amenaza con crear un espiral de violencia de no crearse un ambiente propicio para que las partes en conflicto establezcan un diálogo, el que, por cierto, debe tener como condición el respeto de los derechos humanos y el orden público.

Concretamente, la respuesta insuficiente por parte del Estado en la prestación de los servicios de prevención, protección y vigilancia, amenaza con una escalada de los niveles de violencia y la aparición de fórmulas privadas de obtener justicia; algo que, como sociedad, tenemos absolutamente superado.

Y si bien los conflictos en la región se arrastran por años y en lo absoluto son endosables a una Administración determinada, resultan alarmantes los grados de impunidad; lo que en efecto permite hacer un diagnóstico negativo de la institucionalidad encargada de prevenir y sancionar los hechos delictivos.

Según se desprende del Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en mayo del año 2010, los Estados tienen al menos tres imperativos en relación a la seguridad ciudadana. En primer lugar, está el deber de prevenir el delito, lo que se realiza a través de la creación de políticas que coordinen esfuerzos de todos los agentes involucrados en esta labor: gobierno, policías y fiscales. En segundo lugar, está el deber de investigar, el que se traduce en la realización de acciones concretas para perseguir y eventualmente castigar un hecho ilícito. Finalmente, el deber de sancionar a quienes perpetran estos actos delictivos, con el objeto de no dejar en la impunidad hechos cuyo carácter delictual ya ha sido reconocido en sede jurisdiccional.

Por su parte, resulta pertinente recordar los fundamentos del Mensaje Presidencial que concluyó en la publicación de la ley 20.502, por el cual se creó el Ministerio del Interior y Seguridad Pública:

La importancia de la seguridad pública es que proteger la existencia de condiciones básicas y garantías mínimas para el desarrollo humano; estamos hablando de un núcleo vital que debe ser resguardado para que sea posible el ejercicio de la libertad y de los derechos, y que la sociedad pueda funcionar normalmente. Lo que permite vivir a las personas, sin caer en el temor, es la conciencia de que cuentan con garantías suficientes frente al riesgo y la amenaza; saber que los derechos no pueden ser fácilmente atropellados y que en caso de que alguno sea vulnerado, se pueda recurrir a servicios policiales y judiciales para que termine la amenaza o se repare el daño y se sancione al culpable.

Para lograrlo es fundamental que el Estado cumpla a cabalidad con su deber de brindar protección y que los habitantes cuenten con la

capacidad suficiente para colaborar y participar activamente en las tareas de seguridad.

Particularmente en la Región de La Araucanía, los niveles de inseguridad están directamente relacionados con los índices de eficacia Estatal en la labor preventiva y represiva de los hechos delictivos. Es imperativo dotar de eficacia la labor persecutoria, y ello sólo se puede lograr con la voluntad de todos los involucrados, ya sea mediante el perfeccionamiento de las investigaciones y las indagatorias tratándose de policías y fiscales; de la voluntad y la convicción de atacar el delito con rigor por parte de la autoridad de Gobierno; y de la implementación de los cambios legislativos que se requieran tratándose de la sede legislativa.

Y es que si bien el marco de violencia política que se vive en la Región de La Araucanía –y que se ha traspasado a las unidades subnacionales aledañas- requiere necesariamente para su solución de un diálogo fraterno y de la participación de los actores políticos; no perseguir con firmeza los actos delictivos importa establecer dudas acerca del correcto funcionamiento de las instituciones, instalando en la población la sensación que no habrá sanciones para quienes atenten contra bienes o personas. En definitiva, lo que se debilita es el estado de Derecho.

Lo anterior se condice con el Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, elaborado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que dicha instancia manifiesta “su preocupación por los efectos negativos sobre la gobernabilidad democrática y el estado de Derecho causados por la falta de respuesta, o por la respuesta ineficiente, por parte de las autoridades públicas a las necesidades de la sociedad en el campo de la seguridad ciudadana.”.

La violencia política y la situación de inseguridad que se vive, particularmente en los sectores rurales de la Región, es una realidad que si bien ha recrudecido en los últimos años, no es imputable en concreto a la acción de este Gobierno. En efecto, las causas parecen ser más profundas y de larga data, pudiendo constatarse durante el trabajo de esta comisión que su solución no sólo pasa por el perfeccionamiento de las herramientas persecutorias y sancionatorias.

Ahora bien, aun cuando las reivindicaciones territoriales del pueblo mapuche puedan ser justificadas y atendibles, ello no habilita en un estado de Derecho el uso de mecanismos violentos; sin perjuicio de las instancias de diálogo político que deben constituirse para buscar una solución de fondo al conflicto. El Estado tiene el deber de perseguir el delito y de hacer uso de las herramientas legales vigentes.

Y si bien no todos los ilícitos que tienen lugar con ocasión de reivindicaciones territoriales pueden ser calificadas de terrorismo, bien se puede hacer uso de los tipos penales contemplados en la ley N° 18.314, en la medida que los delitos puedan ser catalogados como tales atendido lo prescrito por la norma. A título ejemplar, la quema de iglesias –incluso con personas en su interior-, con mensajes que amenazan a los feligreses de otros templos en la región de ser víctimas de la misma clase de delitos o que demandan la libertad de sujetos recluidos en centros penitenciarios; es evidentemente una conducta que puede catalogarse como terrorista, y debiese perseguirse como tal.

Es necesario señalar que la utilización de esta herramienta legal no sólo se ve condicionada por las dudas políticas respecto de su conveniencia, sino también por la complejidad que han experimentado los fiscales para acreditar el dolo terrorista. Lo anterior no ha obstado a que, de acuerdo a una evaluación de mérito y conveniencia; la autoridad haya deducido acciones por Ley Antiterrorista o de Seguridad del Estado, lo que es independiente de lo que, en definitiva, determinen los Tribunales de Justicia; cuya responsabilidad no corresponde analizarla pues queda fuera de la esfera de la competencia de esta comisión parlamentaria.

Igualmente, en el marco del proceso penal, todos los intervinientes deben observar una conducta leal entre ellos, y cualquier infracción al deber

de objetividad u otro en el ejercicio de la labor persecutoria de los fiscales, debe canalizarse por la Defensoría Penal Pública en las instancias administrativas y judiciales que correspondan. Sostener lo contrario o descalificar públicamente la labor de los fiscales, en nada ayuda a superar el clima de hostilidad que ha sido conocido públicamente, sino, por el contrario, permite validar las hipótesis de algunos sectores que plantean estas descalificaciones como una operación destinada a hostilizar a jueces y persecutores.

Para asegurar el derecho a la defensa jurídica resulta absolutamente necesaria la labor que realiza la Defensoría Penal Pública; pero, entendemos que ésta debe tener lugar en sede forense y ajustarse a los medios y recursos que entrega la ley; máxima que también se puede predicar respecto de la labor del Ministerio Público.

Ahora bien, en la labor preventiva, sin embargo, parecen advertirse inconsistencias y falencias que sólo han favorecido la impunidad y la falta de antecedentes para desarmar eventuales organizaciones destinadas ya sea al sabotaje o a la perpetración de delitos comunes, de gran incidencia en la región. Las policías carecen de los medios para llevar adelante las órdenes de resguardo policial, lo que afecta la eficacia de la labor preventiva y cautelar de este tipo de medidas. Por otra parte, los defectos en los sistemas de inteligencia policial y la falta de coordinación entre los diversos sistemas de inteligencia, afecta la posibilidad de anticiparse a la comisión de ilícitos. Esto se ha hecho particularmente visible tratándose de quemas de iglesias.

Lo anterior reviste especial gravedad, pues importa una perturbación de la libertad de conciencia y particularmente de la libertad de culto, toda vez que quienes se adjudican la quema de templos pretenden inhibir su libre ejercicio apelando al miedo de quienes asisten a ellos periódicamente, de ser víctimas de delitos de la misma naturaleza; o sencillamente despojando a comunidades completas de su lugar de oración. La inacción en este sentido podría significar responsabilidad internacional para el Estado de Chile, toda vez que las libertades de conciencia y de culto se encuentran consagradas en diversas convenciones internacionales reconocidas por nuestro país.

En cuanto al organismo encargado de velar por el cumplimiento de las condenas impuestas por los tribunales de justicia, esto es Gendarmería de Chile, es necesario prevenir que se vuelvan a cometer las irregularidades denunciadas por la Contraloría General de la República y que importan relativizar el cumplimiento de una condena criminal, atendiendo a factores políticos; desalentando a los organismos involucrados en la persecución penal.

Ahora bien, la autoridad del Gobierno central debe ser estricta en exigir, de sus diversos agentes, un compromiso con el mandato constitucional de resguardo de la seguridad y el orden público. Particularmente, en ello, son los intendentes regionales los llamados a tomar una acción positiva, tanto en la búsqueda de soluciones como del diálogo político; pero, fundamentalmente, de resguardo de la integridad de la población regional. En esta misión no caben vacilaciones, y en ese sentido debe avanzarse en soluciones o planes de seguridad pública que reconozcan las particularidades y la realidad de la Región, donde la autoridad política coordine de manera eficiente los esfuerzos intersectoriales.

Nos hacemos eco del anhelo de los habitantes de la Región de La Araucanía de vivir en un ambiente de paz, fraternidad y seguridad. Ello, por cierto, depende de todos, pero particularmente de los órganos del Estado que deben destinar todos sus esfuerzos en marginar a un pequeño grupo que propicia la violencia; dando espacio al dialogo entre diversos actores regionales. Es misión de la sociedad, en su conjunto, aunar esfuerzos con el fin de elaborar un proyecto que realmente dé respuesta a las justas demandas del pueblo mapuche, en un marco de respeto de los derechos de todos los habitantes de la región.

- **Mención especial al funcionamiento de la Corporación Nacional Indígena y a la política de tierras como causante de la violencia.** Chile es un Estado construido sobre la diversidad, y donde se advierten tensiones entre culturas que no han sido resueltas durante nuestro desarrollo republicano. Muestra de ello son las demandas de nuestros pueblos originarios, que han intensificado sus reclamaciones territoriales en la última década.

Teniendo a la vista esta realidad, que nace con fuerza en los años 80' y se agudiza en la década del 90', el Gobierno ingresa a tramitación legislativa el mensaje que, en definitiva, se transformó en la ley N° 19.253 sobre Protección, Fomento y Desarrollo Indígena, conocida como "Ley Indígena", promulgada en el año 1993. En ella se buscaba recoger las demandas de organizaciones mapuches que participaron en el Encuentro Nacional Indígena de Nueva Imperial, en 1989, y constituye, sin lugar a dudas, el fruto de una negociación con miras a la democracia que se aproximaba.

Sin embargo, lo que en principio era fruto de una negociación que parecía satisfacer las demandas de los pueblos indígenas, coincidió con el inicio de fórmulas de reclamación violentas. Con la llegada del nuevo siglo, y a pesar de los aumentos sustanciales en los presupuestos destinados a la compra de tierras, las vías violentas de reclamación han aumentado considerablemente. Este fenómeno que parecía escalar cuantitativa y cualitativamente, afortunadamente, se ha visto frenado con la incorporación de una glosa en la Ley de Presupuestos 2016, por la cual se prohíbe la adquisición de predios cuya posesión haya sido perturbada. No obstante lo anterior, es por cierto cuestionable que la violencia se vea estimulada por la política de entrega de tierras y que los legisladores no hayan advertido esta circunstancia antes.

En efecto, según muchos de los invitados a la comisión y de acuerdo a las opiniones recogidas en la región, existe consenso en identificar a la política de tierras como uno de los puntos centrales del problema, por lo que introducir modificaciones a la institucionalidad vigente, es sin lugar a dudas, un aspecto prioritario.

Parte sustancial de la revisión de dicha institucionalidad pasa, por cierto, por la revisión de la forma como la Conadi administra el fondo de tierras, y en general, los recursos destinados a los pueblos originarios. La forma desprolija y en muchos aspectos irregular con que se han beneficiado a determinadas comunidades o sujetos, ha generado grandes desigualdades en el acceso al fondo de tierras, lo que va generando resentimiento y pérdida de confianzas en una institución que, por el contrario, debiera ser un puente de fortalecimiento de las mismas. La forma como la Conadi ha cedido a la violencia y al activismo político, particularmente en lo referente al respeto de la antigüedad, sólo ha ayudado a profundizar las desconfianzas y a alejar a quienes, con la esperanza de ver sus derechos reivindicados, acuden a la institucionalidad y se mantienen en ella.

Lo anterior permite explicar un foco importante de violencia y confrontación en los últimos años, esto es, la toma de terrenos, la cual se veía incentivada perversamente por la forma como funcionaba la Conadi. Concretamente, la política de tierras se ha transformado en una mecánica de compra y entrega de inmuebles en sectores rurales, sin apoyo para el desarrollo productivo ni consideraciones de habitabilidad.

En definitiva, y según el parecer de la gran mayoría de quienes visitaron esta comisión, el órgano encargado de ejecutar la política de tierras no ha respondido a las expectativas y, definitivamente, debe ser revisada su continuidad en los términos actuales. Las denuncias de irregularidades y la politización del servicio son compartidas por los actores regionales. Particularmente graves resultan los dichos de los salientes Consejeros Mapuches de la Conadi, Marcial Colin y Andrés Matta Cuminao, quienes denunciaron la intervención de senadores en el proceso de compra de tierras a algunas comunidades; irregularidades en las que habrían tenido el concurso de funcionarios de la Conadi.

El diputado señor Tuma propone remitir copia del Informa a la Contraloría General de la República, debido a que existen algunas comunidades que invocan un título de merced, luego se subdividen y continúan alegando el mismo título, a objeto que el ente contralor resuelva si eso corresponde a un vacío legal o algún subterfugio.

-Puesto en votación el texto de introductorio de Conclusiones, número I, fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes (6x0), señores Berger, Hasbún, Rathgeb, Tuma, Urrutia, don Ignacio, y Venegas.

II. Propuestas.

a) Referidas a cuestiones de orden político-administrativo que han causado la violencia. *Tal como lo señalamos con anterioridad, el marco de violencia que se vive hoy en la región responde, en gran medida, a razones de orden político, que pueden ser atacadas por medio de la implementación de modificaciones en el orden administrativo o, derechamente, con la materialización de acuerdos políticos. No parece razonable enfocar toda la solución en la persecución penal, pues durante el transcurso de esta comisión se han detectado aspectos que incentivan la confrontación y que demandan ser atendidos para prevenir los hechos de violencia.*

-Puesto en votación el título, II Propuestas, y la letra a), fueron aprobados por la unanimidad de los diputados presentes (6x0), señores Berger, Hasbún, Rathgeb, Tuma, Urrutia, don Ignacio, y Venegas.

i. Reconocimiento constitucional de los pueblos originarios.

América Latina viene experimentando, desde los años 90, una serie de cambios que han derivado en el reconocimiento y fortalecimiento de sociedades multiculturales o plurinacionales. En nuestra región sudamericana existen, aproximadamente, 650 grupos indígenas, integrados por unos 43 millones de personas, que representan alrededor del 10% de la población regional. En esta línea, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela modificaron sus textos constitucionales, disponiendo, al menos formalmente, que los pueblos originarios forman parte de su ciudadanía y gozan de unos derechos colectivos cuyo ejercicio debe ser reconocido. En este punto, definitivamente estamos en deuda como Estado; y debemos avanzar en cambios legislativos que importen reconocer constitucionalmente a nuestros pueblos originarios.

-Puesto en votación el punto i fue aprobado por idéntica votación.

ii. Representación política de los pueblos indígenas.

Si bien el Estado de Chile reconoce a nueve pueblos originarios y se observan avances en la restitución de sus derechos, la representación política es un pasivo que no hemos saldado. Y si bien se observan avances sustanciales con el ingreso de los boletines 10.526-06 (crea el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas) y 10.687-06 (crea el Ministerio de Pueblos indígenas), faltan medidas referidas a la participación. Con el objetivo de dar representación política a sectores excluidos de la sociedad, las democracias desarrolladas del mundo recurren a variadas herramientas relativas a sus sistemas electorales. En este orden de cosas, parece conveniente, tal como lo han hecho otros países a nivel regional e internacional, adoptar mecanismos que permitan garantizar la participación política indígena en todo el ámbito público.

-Puesto en votación el punto ii fue aprobado por idéntica votación.

iii. Determinación precisa del proceso de consulta que dispone el Convenio 169 de la OIT. *Se debe avanzar en una institucionalidad apropiada que coordine nacionalmente las consultas y unifique criterios, para evitar una proliferación de este mecanismo, y se las dote de autoridad y legitimidad. De esta manera, los criterios de consulta deben ser definidos centralmente, acordados entre todos, para que de ese modo cuando bajen lo hagan con un consenso sustantivo.*

Respecto de este punto, resulta vital el papel que desarrollarán el Consejo Nacional y los Consejos de Pueblos Indígenas, de mantenerse la actual redacción del Boletín 10.526-06; velando por el cumplimiento del Convenio 169 y del proceso de consulta.

La diputada señora Clemira Pacheco hace presente que no comparte la propuesta de Conclusiones y Propositiones, y anuncia que hará llegar a la Comisión una propuesta propia, en representación de su Bancada.

-Puesto en votación el punto iii fue aprobado por mayoría (6x0+1); votaron a favor los diputados señores, Hasbún, Rathgeb, Tuma,

Urrutia, don Ignacio, y Venegas; mientras que se abstuvo la diputada Pacheco, doña Clemira.

iv. Modificaciones a la Ley Indígena y, en particular, a la política de tierras. Es necesario perfeccionar, en lo inmediato, los procedimientos de compra de tierras, en particular lo referente al artículo 22, letra b), de la ley N° 19.253. Respecto de la necesidad de modificar la política de tierras y la forma cómo está trabajando la Conadi no hubo dos opiniones en esta comisión. En efecto, tanto desde la propia Conadi como desde el mundo académico y gubernamental se plantearon diversas propuestas para mejorar este punto:

- **Establecer elementos que permitan evitar la proliferación de comunidades y la reutilización de títulos.** Ni la ley ni el reglamento facultan a la Conadi para prohibir la constitución de comunidades que cumplan con los requisitos -artículos 10 y 11 de la ley N° 19.253- y, por tanto, cumpliendo aquéllos, la Corporación debe registrar y conceder personalidad jurídica a la comunidad. En tal virtud, se debe impedir que se creen nuevas comunidades y la utilización por parte de éstas de un mismo título de merced. La necesidad de hacer un cambio apunta a evitar las compras de tierras a estas nuevas comunidades.

-Puesto en votación el punto iv y su primer párrafo fueron aprobados por la misma votación.

- **Establecer con carácter permanente la glosa de la ley de Presupuestos 2016.** La Conadi debe establecer la antigüedad de la demanda, priorizar a las comunidades que no tienen compra y particularmente respetar, por sobre todo, la prohibición de adquirir predios que hubiesen sido objeto de perturbaciones en su posesión. Esto ha tenido notables resultados en lo que va del año, donde la ocupación violenta de predios con miras a su compra prácticamente ha desaparecido. Sobre este punto, se encuentra en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados el boletín 10593-06.

-Puesto en votación el presente párrafo fue aprobado por idéntica votación.

- **Suprimir por la vía legal o mediante un dictamen de la Contraloría General de la República las cuotas de facto.** La práctica del servicio ha generado una cuota de facto en la relación familia-hectáreas a recuperar, cuestión que no encuentra amparo en la norma legal actual. Lo

anterior permite una cuota de facto de 10 hectáreas por familia y el concepto de comunidad con compra incompleta, situación que últimamente la Contraloría ha reparado y que tiene en consulta. Entonces, la alternativa vía Contraloría General de la República es interpretar administrativamente mediante un dictamen que la solicitud de financiamiento de compra de tierras finalice con la resolución que la aprueba, de manera que adquirida la propiedad y traspasado el dominio a la comunidad, la demanda se entenderá por satisfecha, no pudiendo apelar nuevamente, en el futuro, al artículo 20 letra b).

-Puesto en votación el presente párrafo fue aprobado por idéntica votación.

- Fortalecer el presupuesto para las postulaciones efectuadas según el artículo 20 letra a). A diferencia del artículo 20 b), que trata de un fondo de financiamiento, el 20 a) es un subsidio no vinculado al detrimento territorial histórico, sino, más bien, a la insuficiencia territorial sobreviniente en la actualidad. De contemplar un sistema que permita cerrar aquélla y, por tanto, disminuyendo la demanda del artículo 20 b), la efectuada por el subsidio 20 a) debería aumentar, fenómeno que actualmente está ocurriendo.

-Puesto en votación el presente párrafo fue aprobado por idéntica votación.

- Crear mecanismos transparentes y competitivos para la compra de tierras. Es necesario crear fórmulas de adquisición de los predios en base a licitación pública, de manera de transparentar el proceso y generar una oferta que permita reducir los precios considerablemente. Se debe terminar con la especulación inmobiliaria a que ha dado lugar el sistema de compra de tierras, de manera tal de evitar el pago de escandalosos sobrepuestos que han beneficiado ilícitamente a gestores inmobiliarios que aprovechan las precariedades del sistema. En este sentido, resulta pertinente explorar la posibilidad de extraer esta competencia de la esfera de la Conadi y radicarla en un organismo especializado y que ofrezca mayores garantías. De prosperar la nueva institucionalidad, habrá que crear las condiciones para que el Servicio Nacional de Pueblos Indígenas lleve adelante esta tarea de manera transparente y alejada de los patrones actuales.

-Puesto en votación el presente párrafo fue aprobado por mayoría (6x1); votaron a favor los diputados señores Berger (en reemplazo del diputado señor Becker), Hasbún, Rathgeb, Tuma, Urrutia,

don Ignacio, y Venegas; votó en contra la diputada Pacheco, doña Clemira.

- **Diversificar los mecanismos de compensación.** *El enfoque de la política indígena, básicamente, ha estado centrado en la tierra, es decir, en un problema de hace ciento cincuenta años, pero las sociedades han cambiado. La mayoría de la población hoy es mapuche-urbana (74 %), de manera que ese enfoque no da cuenta de las necesidades de una sociedad moderna, en la que las oportunidades están en otra parte. Expertos e incluso algunos consejeros de la Conadi han planteado, con un sentido de realismo a nuestro entender, que la restitución de tierras ancestrales en los términos llevados hasta hoy se hace compleja e impracticable por la oferta de tierras disponible. Además, no cabe duda que la improductividad de algunos terrenos choca con la lógica de trabajo agrícola propia del pueblo mapuche, cuyos integrantes podrían preferir recursos para aumentar su capacidad productiva, entre otros fines.*

-Puesto en votación el presente párrafo fue aprobado por mayoría (6x0+1); votaron a favor los diputados señores Berger (en reemplazo del diputado señor Becker), Hasbún, Rathgeb, Tuma, Urrutia, don Ignacio, y Venegas; mientras que se abstuvo la diputada Pacheco, doña Clemira.

v. Mayor participación de los pueblos indígenas en los procesos de planificación territorial y en la aprobación de proyectos de alto impacto ambiental. *Incentivar una participación activa de los pueblos originarios en el diseño e implementación de los instrumentos de planificación territorial y en la aprobación de proyectos que incidan fuertemente en el entorno y el medioambiente, particularmente en comunas con alto porcentaje de población indígena. Esto responde a la necesidad de respetar y comprender la cosmovisión de los pueblos originarios –particularmente del pueblo mapuche-, donde la naturaleza y el medioambiente tienen un valor central.*

-Puesto en votación el punto v fue aprobado la misma votación anterior.

vi. Fortalecimiento de la educación intercultural. *La enseñanza intercultural permitiría a la sociedad dimensionar de manera distinta las relaciones, basadas hoy en el desconocimiento y con el prejuicio de la violencia asociada a las comunidades. El reconocimiento de la lengua y su integración en el currículum escolar, así como la masificación de la educación intercultural bilingüe; podrían ser herramientas de gran utilidad para rescatar y revalorizar los conceptos culturales, sobre todo en las*

comunidades urbanas donde se expresa, con mayor énfasis, la pérdida de la lengua.

El diputado señor Venegas planteó que en la Región se imparte dentro de la malla curricular de los colegios el ramo de mapudungun. Sin embargo, le merece dudas si hacerlo obligatorio al resto del país generaría un efecto positivo dentro de los jóvenes. Tal vez, sería conveniente acercar la cultura por otros medios.

-Puesto en votación el punto vi fue aprobado por idéntica votación.

vii. Envío a trámite legislativo de un Mensaje Presidencial para la Región. *Es fundamental que se concrete el anuncio del actual Ministro del Interior y Seguridad Pública, señor Mario Fernández, en orden a ingresar a trámite legislativo un proyecto de ley que otorgue beneficios especiales a la Región, entendiendo sus particularidades y necesidades. De esta manera, tal como se ha hecho con regiones extremas, La Araucanía, como la región más pobre y con peores índices de desarrollo humano del país, amerita un trato diferenciado que vaya en auxilio de sus habitantes y de su decaída actividad económica.*

-Puesto en votación el punto vii fue aprobado por idéntica votación.

El desarrollo en extenso del debate se encuentra en el archivo de audio digital, según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 256 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

- Se levanta la sesión a las 10:30 horas

SERGIO MALAGAMBA STIGLICH,
Secretario de la Comisión.